

na la garantías otorgadas por el art. 14 de la Constitución de 1857. Vistas las constancias de autos, y considerando: que los Estados, en uso de su soberanía, son los únicos que pueden decidir sobre la legitimidad de las autoridades en el régimen interior: que á los juzgados de Distrito no les toca examinar ni menos decidir sobre la legalidad de las autoridades que funcionan, porque esta ~~urgencia~~ sería una violación expresa del art. 40 del código de la República: con tales fundamentos, se declara: que es de revocarse y se revoca la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito que concedió el amparo al quejoso, y se decreta: que los supremos poderes de la Unión no protegen á D. Adolfo Merchever, contra los procedimientos del juez conciliador del Distrito de Pachuca.

Devuélvase sus actuaciones con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, seis de Diciembre de mil ochocientos setenta y uno. *Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

ACUERDO.

Sobre licencia á los empleados federales.

El C. Lic. José Cirilo Alba, promotor fiscal del juzgado de Distrito de Tlaxcala, con fecha 8 del actual solicitó licencia por

siete días con goce de sueldo, sobre cinco que le concedió el C. gobernador de aquel Estado, conforme á las circulares de 27 de Marzo y 6 de Diciembre de 1850; y dada cuenta á esta Corte Suprema, acordó lo que sigue:

“México, Enero ocho de mil ochocientos setenta y dos.

Se le concede la próroga de siete días, sobre la licencia de cinco que le concedió el C. gobernador de Tlaxcala; manifestándose al promotor, que para toda licencia debe dirigirse á la Corte, á quien corresponde darla conforme á la ley de 29 de Julio de 1862, por la cual no pueden considerarse vigentes las circulares de 27 de Marzo y 6 de Diciembre de 1850. Publíquese.”

Lo que digo á vd. en cumplimiento del acuerdo de esta Corte, y para su publicación en ese Semanario.

Independencia y libertad. México, Enero diez de mil ochocientos setenta y dos. —*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.—*C. director del “Semanario Judicial.”*—Presente.

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por D. Rafael Ruiz, contra el C. jefe político de Sombrerete que lo aprehendió y lo remitió á Zacatecas donde permanece preso, sin que se le haya hecho saber el motivo de su prision.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que D. Rafael Ruiz se ha quejado de que desde el 17 de Octubre último que fué aprehendido y remitido para esta capital por el jefe político de Sombrerete á disposición del gobierno del Estado, se le tiene en prision é incomunicado hace mas de tres días sin ha-

bérsele declarado bien preso, ni observado con él los requisitos legales que protegen y aseguran para todo acusado los artículos 19 y 20 de la Constitución: asegura hallar en ese hecho vulneradas sus garantías individuales, y por lo mismo pidió amparo y protección en su solicitud de 24 de dicho mes de Octubre, así como la suspensión inmediata y provisional del acto reclamado, que le fué negada por auto de 28 del mismo mes.

Pedido informe con justificación al gobierno del Estado, como autoridad que aparece ejecutora del acto reclamado, manifestada en el de fojas 17 reproduciendo el que rindió á fojas 9, que el gobierno no ha aprehendido ni mandado aprehender al quejoso, ni lo ha detenido mas tiempo del que señala la Constitución, por haberse limitado, según las copias que acompaña, desde que recibió la comunicación y lista de la gefatura de Sombrerete á remitirlo á los jueces que ha creído competentes para juzgarlo del delito de salteamiento con la gavilla de Gamez y Alatorre cometido en Riogrande é intentado en Sain-alto de que está acusado, y que motivó su aprehensión y consignación en 24 de Octubre al juzgado 1º de letras de Fresnillo que practica la averiguación de dicho delito.

Por lo expuesto, y refiriéndose el promotor fiscal á los fundamentos en que se apoyó para pedir se negara al quejoso la suspensión que solicitaba del acto reclamado de que estando acusado de haber formado parte de las gavillas de salteadores que robaron á Riogrande é intentaron hacer lo mismo en Sain-alto, y estando para los salteadores y plagiarios suspensas por la ley de 18 de Mayo de este año las garantías que acuerdan los artículos 19 y 20 de la Constitución, es igualmente de opinión sobre lo principal de la solicitud de D. Rafael Ruiz, que no es de concedérsele el amparo y protección que pide de la justicia de la Unión, en virtud de la suspensión de las garantías relacionadas: concluye por

tanto, con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución, y ley de 20 de Enero de 1869, pidiendo al juzgado se sirva declararlo así, por ser de justicia.

Zacatecas, tres de Noviembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Jesus M. Licona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, Noviembre diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por D. Rafael Ruiz, por haber sido aprehendido por el C. jefe político de Sombrerete y remitido á esta capital, donde se le mantuvo en rigurosa incomunicación sin hacersele saber el motivo de su prisión y el nombre de sus acusadores, pasando mas de tres dias sin haberse pronunciado el auto de prisión, considerando violadas las garantías que protegen los artículos 16, 19 y 20 de la constitución general. Vistos los informes del supremo gobierno del Estado y los documentos que acompaña, así como lo pedido por el C. promotor fiscal y los autos en que se mandó, no se suspendían los procedimientos y se citó para sentencia. Apareciendo: que ni el C. jefe político de Sombrerete, ni el C. gobernador del Estado han violado las garantías que protegen los artículos 16, 19 y 20 de la constitución general, por haberse limitado las expresadas autoridades á la aprehensión de Ruiz, consignándolo á los jueces que ha creído competentes, de conformidad, con lo dispuesto en la ley de veinte de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve y lo pedido por el C. promotor fiscal, sentenciando definitivamente este juicio, declara:

Primero; que la justicia de la Unión no ampara ni protege á D. Rafael Ruiz contra los actos del C. jefe político de Sombrerete y del C. gobernador del Estado, porque al consignarse á Ruiz á los jueces que se ha creído son competentes, las dilaciones

que se han seguido en el juicio, no constituyen una violacion de las garantías que protegen los artículos 16, 19 y 20 de la constitucion general.

Segundo; No se impone multa á D. Rafael Ruiz por su notoria insolvencia.

Tercero; Remítanse estos autos en revision á la Suprema Corte de Justicia, publíquese ésta sentencia en el periódico oficial del Estado y en el Semanario Judicial. Hágase saber, librándose exhorto al C. juez 1º de letras de Fresnillo, para conocimiento del interesado. El C. juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Mantel G. Solana.*—*Luis G. Chavez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

Mexico, Diciembre cuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo que en veinti cuatro de Octubre de este año promovió ante el juez de Distrito del Estado de Zacatecas Rafael Ruiz, quejándose de que el día diez y siete del mismo Octubre, fué reducido á prision y remitido á Zacatecas donde estaba incomunicado á disposicion del gobierno del Estado, habiéndose violado en su persona las garantías que reconocen los artículos 16, 19, y 20 de la constitucion federal. Visto el informe con justificacion rendido por el gobernador, en que espone: que Ruiz, aprehendido por el gefe político de Sombrerete, á causa de haber formado parte de unas gavillas que ocuparon á Rio grande cometiendo robos, é intentaron hacer lo mismo en San Alto, le fué remitido por la gefatura política de Zacatecas en veintitres de Octubre poniéndolo á disposicion del gobierno: que éste en la misma fecha le consiguió al juez de Distrito, quien lo devolvió en veinticuatro, creyéndose incompetente, y que con la misma fecha se

entregó á la gefatura política de quien se habia recibido, para su remision al juez 1º de letras del Fresnillo, de lo cual resulta que el gobierno se habia limitado á consignar al quejoso á los jueces que habia creído competentes. Visto lo pedido por el promotor fiscal sosteniendo la improcedencia del recurso de amparo, y la sentencia del juez de Distrito que lo deniega, atento á que ni el gefe político de Sombrerete ni el gobernador del Estado de Zacatecas han violado las garantías invocadas por Ruiz, habiendo reducido aquellas autoridades sus procedimientos á la aprehension y consignacion del quejoso á su juez respectivo, como acusado de un delito. Con este fundamento que expresa la obligacion cumplida de las autoridades á que se refiere, y con apoyo de la ley de veinte de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve se resuelve: que es de confirmarse y se confirma la sentencia referida del juez de Distrito de Zacatecas, pronunciada en diez y ocho de Noviembre próximo pasado, por la cual se declara:

Primero; que la justicia de la Union no ampara ni protege á D. Rafael Ruiz contra los actos del C. gefe político de Sombrerete y del C. gobernador del Estado, porque al consignarse á Ruiz á los jueces que se ha creído competentes, las dilaciones que se han seguido en el juicio no constituyen una violacion de las garantías que protegen los artículos 16, 19 y 20 de la constitucion general.

Segundo; no se impone multa á D. Rafael Ruiz por su notoria insolvencia.

Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio*

nacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M^a Aguilar, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre quince de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.*

COMPETENCIA

Suscitada ante el juzgado 2º de lo civil de Puebla y el de la misma clase de esta capital, para conocer del juicio ejecutivo que la Señora D^a Vicenta Darás, religiosa exclaustrada, ha promovido contra el actual poseedor de la casa número 13 del callejón de Belemitas, D. Ramon Iglesias.

PRELIMEN TO FISCAL.

El fiscal dice: que se ha suscitado competencia entre el juzgado 2º de lo civil de Puebla y el de la misma clase de esta capital para conocer del juicio ejecutivo que la Sra. D^a Vicenta Darás, religiosa exclaustrada, ha promovido contra el actual poseedor de la casa número 13 del callejón de Belemitas C. Ramon Iglesias, sobre pago de réditos de un capital, que con hipoteca de la referida casa y de la del número 3 del callejón de Bilbao cedió á dicha religiosa el Supremo Gobierno en pago de su dote, conforme á las leyes vigentes.

El fiscal que ha examinado las razones en que los jueces competidores se fundan para apoyarse respectiva jurisdicción; adopta desde luego las aducidas por el juez 2º de México, y por lo mismo entiende que éi es la autoridad competente para seguir conociendo de un juicio que no es otra cosa sino la continuación de otro anterior; formando en realidad un incidente.

El C. general Ramon I. Iglesias, ha

promovido y sigue en la actualidad, según consta del cuaderno marcado con el número 3, un juicio contra la Sra. D^a M. de los Angeles Talla de Sort, como propietario que asegura ser, puesto que ese juicio lo promueve como tercer opositor de dominio de la referida casa número 3 del Callejón de Belemitas, que es la misma finca que aparece hipotecada á favor de la Sra. Darás la que hoy reclama los réditos de esa hipoteca contra dicho C. Iglesias, en su calidad de poseedor de aquella finca; Ahora bien, tanto los autos relativos á este juicio, como también otras relativas á un juicio ejecutivo, que la expresada Sra. Darás promovió contra la Sra. Talla de Sort sobre pago también de réditos; todas esas actuaciones, que como dice muy bien el C. juez 2º de México, y aun cuando no lo dijera, basta la simple lectura de ellas, sirven de antecedentes para fallar la demanda que ahora promueve D^a Vicenta Darás contra D. Ramon Iglesias y cuyos autos se han seguido siempre ante el referido juez 2º, sin que antes de ahora se haya puesto en duda su competencia; persuaden á que, como dijo el fiscal, la demanda que ha dado motivo á esta competencia está exactamente ligada con las que á su vez han promovido el C. Iglesias contra D^a M^a de los Angeles Talla de Sort y D^a Vicenta Darás contra la misma Sra. Así pues, habiendo tan íntimo enlace entre estas demandas, que casi se confunden en un juicio, es de una consecuencia rigurosamente lógica que un mismo juez conozca de todas ellas.

Quizá convencido de esta razón pero deseando á todo trance esquivarse de la jurisdicción del juez de México la parte del C. Iglesias, á falta de un fundamento sólido, apeló al que menos puede ser admitido, cual es el de promover la incompetencia del juez 2º de esta capital protestando el fuero del domicilio; á cuyo efecto el C. Iglesias dice que: estando domiciliado en Puebla y no en México, su juez natural no es el